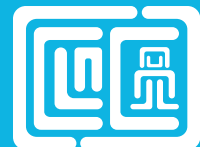


POSICIONAMIENTO

Las **COMPRAS PÚBLICAS** de **COMERCIO JUSTO:**


una estrategia para la recuperación
económica post-pandemia



CLAC



FAIRTRADE



La pandemia del covid 19 tuvo un efecto bastante negativo para la salud pública y para la economía de los países. Las y los pequeños agricultores no estuvieron exentos de las consecuencias que han generado una de las peores crisis en el mundo, en general y en América Latina y el Caribe, en particular. Esta crisis ha profundizado la ya existente desigualdad de la región, que afecta en mayor nivel a las comunidades más vulnerables.

De acuerdo con la CEPAL (2021) las medidas restrictivas, así como otras intervenciones para controlar el contagio ha causado mayor desempleo, informalidad y ha aumentado los niveles de pobreza, incluso el PIB de la región descendió a niveles del 2010. Lo anterior aunado a un contexto económico mundial hostil, exacerbado por el conflicto entre Rusia – Ucrania, ha generado nuevos retos de acceso a mercados internacionales, cuyos afectados principales son los sectores en desventaja comercial y en territorios más difíciles de acceder en el sur global.

Recuperación Económica Justa

Se evidencia, entonces, la necesidad de que se implementen medidas para promover la recuperación económica de la región, cuyos países tienen una alta población que ha visto afectada sus medios de vida a raíz de la crisis económica y de la emergencia climática. Es por eso, que dichas medidas deben considerar políticas públicas con un enfoque diferenciado para las poblaciones rurales y que esté basado en la justicia social, ambiental y económica.

La recuperación justa se refiere a construir economías inclusivas que prioricen los derechos humanos, la cual se oriente a asegurar el bienestar de las personas y del medio ambiente. El crecimiento económico desmedido ha demostrado no ser sostenible mientras no se tengan en cuenta otros factores y poblaciones claves para la sostenibilidad de las personas y el planeta.

Una economía inclusiva implica dinamizar las economías mediante el consumo local y construyendo circuitos cercanos de intercambio. De esa manera se fomenta la circulación de los recursos, se impulsa la diversificación de las fuentes de ingreso y se promueve la generación de valor por el trabajo agrícola. Es así como las compras públicas se pueden establecer como una estrategia para esa dinamización de las economías locales y para la promoción de un comercio más justo y solidario.

Compras Públicas como herramienta para una recuperación económica justa en América Latina

El Comercio Justo y las compras públicas tienen espacios comunes de colaboración, ya que es clave distribuir los recursos públicos para contribuir a un crecimiento y desarrollo económico con equidad. De hecho, como lo explica Bravo, et. al (2022) en la publicación de la CEPAL y CLAC Programas de compras públicas a la agricultura familiar: **¿Un nuevo canal de ventas para el comercio justo?, “las compras públicas de alimentos y productos de la agricultura familiar es una política pública diferenciada hacia este sector que ha alcanzado un rol importante en la agenda del desarrollo de los países de**

Bravo, et. al (2022) también mencionan cómo las compras públicas a pequeños agricultores se constituyen como una **“estrategia multidimensional que requiere acciones coordinadas en los ámbitos de la contratación pública, la agricultura y la seguridad alimentaria y la nutrición”**. Es decir, se traduce la voluntad política para balancear y regular las relaciones comerciales. En ese sentido las compras públicas resaltan el rol del Estado como actor de consumo responsable.

Las compras amplían las oportunidades de venta de otros productos de la finca familiar que son relevantes para los programas de alimentación escolar y mercados campesinos.



En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2016, las compras públicas representaron el 33% del gasto de los gobiernos centrales (14% del PIB). En la región, las compras públicas constituyen el 9% del producto interno bruto (PIB) total, lo que equivale, en promedio, al 30% del gasto público de los países. Este gasto varía por país: desde el 15% del gasto total del gobierno en Argentina y Uruguay, hasta el 47% en el Estado Plurinacional de Bolivia y Perú (BID, 2017).





Oportunidades y retos de las organizaciones de pequeños(as) productores(as) para incluirse en las compras públicas

Las organizaciones de pequeños agricultores(as) de comercio justo pueden aprovechar las oportunidades que se presentan con sistemas de compras públicas en este escenario actual, competitivo y que va a un ritmo acelerado. Estos implican, también, atravesar diversos desafíos que se deben tener en cuenta para poder desarrollar programas de compras públicas efectivos.

En primer lugar, es necesario establecer políticas públicas de fomento productivo que faciliten la superación de barreras de entrada a este tipo de sistemas. Al establecer licitaciones públicas con las autoridades es importante incluir criterios de selección diferenciados que no se limiten solo al mercado. Es decir, que tengan en cuenta el origen de las organizaciones aplicantes, tamaño, y otros criterios sociales, económicos y medioambientales, como por ejemplo los que ya cumplen las organizaciones certificadas de comercio justo.

Una de las oportunidades más evidentes es el comercio digital, el cual se ha incrementado de forma acelerada, especialmente desde que empezó la pandemia en el 2020. Sin embargo, el comercio digital implica tener en cuenta algunos retos para las organizaciones de pequeños agricultores(as) como el difícil acceso a internet en zonas rurales y las deficiencias en adopción de tecnologías. Además, actualmente los acuerdos comerciales tienen pocas disposiciones para el comercio digital, así como una carencia de un entorno legal y normativo que permita desarrollar el comercio electrónico de forma segura.

Hablar de las compras públicas como herramienta de recuperación se refiere también a promover ingresos diversificados para las y los pequeños productores(as) en desventaja con el objetivo de que puedan procurar un ingreso digno para su familia. No obstante, es clave entender que implementar estrategias de mercado no puede ser la única solución para para que, en efecto, las familias cuenten con ese ingreso digno. Es importante poner en evidencia que hay un contexto de Derechos Humanos que no están garantizados para los pequeños agricultores, incluso si se amplía el mercado.

En el marco de una recuperación económica justa, como pequeños productores(as), instamos a que los programas de compras públicas tengan un enfoque más inclusivo y equitativo. De esta manera los pequeños productores(as) podrán ser proveedores del Estado de manera más eficiente y los recursos públicos contribuirán a la recuperación económica pos-covid con un impacto real en los medios de vida de las familias agricultoras de la región.





www.clac-comerciojusto.org



Esta publicación se ha producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Sus contenidos son de responsabilidad exclusiva de CLAC y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Unión Europea.